

Durango, ante el Juez de Distrito del Estado del mismo nombre, el C. Julian Chavarria, por sí y en representacion de cincuenta y tres comerciantes del Parían ó Mercado de esa Ciudad, contra la providencia del Gefe político del partido del centro de la misma Ciudad, lanzándoles fuera del Parían, echándoles á viva fuerza para otro lugar que no presta la seguridad y conveniencia necesarias, con cuya providencia alegan los promoventes, que se ha violado en sus personas las garantías que otorga el artículo 4º de la Constitucion de la República.

Vistas las constancias de autos, y considerando: que las providencias reclamadas no han estado en las atribuciones legales del Gefe político, sino que en caso de deberse dictar, es de la competencia del Ayuntamiento; que suscitada cuestion ante el Gobernador del Estado entre el Ayuntamiento y los promoventes de una parte, y el Gefe político de otra, sobre las providencias expresadas, esa cuestion no se ha resuelto, y han quedado por lo mismo las providencias subsistentes aunque sin efecto hasta hoy por virtud de la suspension decretada por el Juez de Distrito; y que en mérito de las razones acabadas de exponer, la providencia del Gefe político, resulta una restriccion ilegal á la libertad del comercio de los quejosos, constituyendo la violacion de garantías de que se quejan.

Por tales fundamentos y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente; 1º: se revoca la sentencia del Juez de Distrito del Estado de Durango, pronunciada en la Ciudad de éste nombre á 4 de Junio del corriente año, en la cual declara: que la Justicia de la Union no amparará, protege á los comerciantes del Parían, presentados ante ese juzgado, contra las providencias del C. Gefe político, en virtud de las que pretendió obligarlos á trasladarse á la antigua huerta del ex-convento de San Francisco. 2º: La Justicia de la Union, ampara y protege á dichos comerciantes contra

las providencias referidas del Gefe político del Partido del centro de Durango.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de ésta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan José de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Ndjera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México 23 de Setiembre de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Morelos por la Sra. D^a Atanasia Torres de Fernandez, contra la Direccion General de Rentas del Estado, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. Promotor fiscal dice: que D^a Atanasia Torres viuda de Fernandez, se ha presentado al Juzgado entablando el recurso constitucional, y pidiendo se le ampare en el goce de las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitucion, y que viola en persona, la Direccion General de rentas del Estado, con el hecho de cobrarle, haciendo uso de la facultad económico-coactiva y como rezagos, las contribuciones impuestas desde 1861 á 1871, alterando la cuo-

ta que le habian asignado las juntas calificadoras.

Segun el mandamiento que obra á fojas 1 y 2 de estos autos, se cobran á la señora Torres las contribuciones causadas por sus fincas, ubicadas, una en la plaza principal y la otra en la primera calle de Acapulco de esta ciudad. Respecto de esta última, no se dice que haya sido cuotizada por las juntas calificadoras en menor cantidad de la que en el mandamiento le asigna la Direccion, y solo se hace valer, que habiéndose incendiado y no reparada aun, está exceptuada del pago de contribuciones por el decreto de 19 de Octubre de 1868; pero establecido por el artículo 2º del citado decreto, que tal excepcion se justificará ante el Administrador de Rentas con el correspondiente certificado de la primera autoridad municipal, y una informacion de cinco testigos que se rendirá ante el Conciliador con citacion del Administrador, no hay constancia hasta ahora de que la Sra. Torres hay rendido tal prueba, y el C. Director niega que lo haya verificado.

Del escrito de queja, informe con justificacion y documentos adjuntos, aparece comprobado: que la finca de la plaza principal fué valuada por el C. Luis Aranda, quien segun el C. Director fué comisionado por el Gobierno del Estado de México, en \$12,100; y con fecha 26 de Octubre de 1851, se dió á conocer á la Sra. Torres ese avaluo conforme al artículo 1º de la ley de 16 de Octubre de 1850; que en Julio de 1868, el Administrador de Rentas de este Distrito manifestó al Gobierno del Estado de México, que la junta calificadora establecida por el decreto de 14 de Junio de 1861, cuotizó la propiedad urbana haciendo una baja considerable á los avaluos por que anteriormente pagaba sus contribuciones esa misma propiedad; y habiendo pasado esa erronea cuotizacion á los padrones subsecuentes, los propietarios se resistian á pagar conforme á los avaluos originales, por lo que consultaba si debia hacer el cobro segun esos avaluos ó

por los valores que las fincas representaban en los padrones; que en Agosto del mismo año, el Gobierno resolvió que el cobro de la contribucion de ocho al millar debia hacerse por los avaluos que existian en la Administracion, bajo el concepto de que si los interesados no estuvieren conformes, podian pedir se hiciera nuevo avaluo á su costa, sin perjuicio de hacer el pago en los terminos mandados, hasta que estos avaluos se practicasen; que en Marzo de 1870, la Sra. Torres ocurrió al Gobierno del Estado, manifestando que la casa de que nos ocupamos habia causado y cubierto siempre sus contribuciones sobre un avaluo de \$6,000, y pretendiéndose cobrar los rezagos sobre \$12,000, pedia se mandara al Administrador que para lo sucesivo cobrase las contribuciones de esa casa atendiendo al avaluo de \$6,000, y no al de \$12,000; que si bien existia, nunca se habia seguido; pues desde que se practicó, fué reconocido como excesivo y erroneo, y habiendo informado la Administracion que desde 1861 la junta calificadora habia cuotizado la casa en \$6,000 y por esa cantidad habia seguido pagando la Sra. Torres hasta Agosto de 1868, el C. Gobernador resolvió se estuviera á lo mandado por el Gobierno del Estado de México en 1868; y por último, que la Sra. solicitó se practicase nuevo avaluo, y en 15 de Octubre de 1870 fué apreciada su casa por el perito C. Manuel Rendon en \$6,138,06.

Ahora bien, condonados por el decreto de 22 de Noviembre de 1869 los rezagos que por cualquier impuesto se adeudaban hasta 31 de Diciembre de 1860, el decreto expedido en 24 de Enero de 1861 que impuso el 5 al millar á las fincas que hubiesen sido avaluadas del 16 de Octubre de 1847 en adelante, y el 6 al millar á todas las demas, no fijó manera especial de cuotizar á los causantes; la ley de 14 de Julio de 1861 impuso el 10 al millar á la propiedad raíz, derogando las contribuciones directas establecidas, y facultando al Gobierno para que reglamentara la manera de hacer efectivo

el cobro; en uso de esa facultad, el reglamento de la misma fecha estableció una junta calificadora en la cabecera de cada partido á la que debían ocurrir los causantes, haciendo la manifestacion del valor de sus capitales y de la cuota que en consecuencia les corresponde, para que si la junta no tenía observacion que hacer, anotara de conformidad esa manifestacion, y en caso contrario decidiera la cuota que debía pagar el causante, teniendo presente para sus calificaciones los valores por que entonces pagaban las fincas la contribucion de 5 y 6 al millar; los causantes que no hubieran hecho manifestacion, perdian todo derecho á reclamar, y quedaban obligados á pagar la cuota que les impusiera la junta calificadora á quien para el efecto debían los administradores dar aviso de las personas que segun los datos de su oficina no hubieran cumplido con ese deber; pero los demas podían ocurrir dentro de cinco dias de recibida la boleta á la Junta revisora cuya decision se ejecutaria sin ulterior recurso.

El decreto de 14 de Enero de 1862 que impuso el cinco al millar á la propiedad raíz, previno en su artículo 2, que dicha contribucion se cobrara en la forma y con sujecion á las bases establecidas en la ley de 14 de Junio y sus reglamentos; y segun el documento que obra á fojas 4, la Junta calificadora cuotizó á la Sra. Torres sobre \$6.000. La contribucion decretada en 19 de Noviembre de 1862, tuvo tambien la misma base, y segun el documento marcado con el número 4, la finca de que se trata fué apreciada en \$6.000 por la Junta calificadora. Las contribuciones del uno por ciento decretadas en 30 de Enero de 1863 y 28 de Enero de 1867, se cobraron segun los padrones existentes, como aparece de los documentos marcados con los números 5 y 6, y lo mismo se observó con el treinta y uno y cuarto por ciento decretado en 19 de Marzo de 1867. El decreto de 15 de Enero de 1868, impuso el cuatro al millar sobre el valor de la propiedad del territorio que

TOMO IV.—PARTE II

formó el tercero de los Distritos en que fué fraccionado el Estado de México; y por su artículo 2 previno, que su recaudacion se hiciese por los mismos padrones que entonces servian para el cobro de la contribucion de seguridad, sin que autorizasen á los Administradores para variarlos.

Por último, el pago de la contribucion de ocho al millar impuesta á la propiedad raíz por la ley de Hacienda de 25 de Abril de 1868, segun el artículo 4 de la misma, debía hacerse por los valores que hasta entonces se hubiesen dado á las fincas, y por los avaluos practicados segun padrones existentes en las Administraciones; la misma ley estableció juntas cuotizadoras, pero especialmente para la contribucion personal que tambien impuso y por la que nada se cobra á la Sra. Torres. Hay que advertir, que no obstante la resolucion de 3 de Agosto de 1868 que autorizaba al Administrador para cobrar segun el avaluo de 1851, solo se exigió el pago á la Sra. Torres por \$6.000, segun los documentos marcados con el número 8.

Esta contribucion fué reformada por el decreto de 14 de Octubre de 1868; y por el reglamento de 22 del mismo, se estableció, que si los Administradores sospechaban que alguna finca aparecía con menos valor del que debía tener, lo manifestaran al Gobierno, y mientras resolvía se cobrara la cuota correspondiente al valor antiguo, y los propietarios podían pedir que á su costa se practicara nuevo avaluo, á lo que debía acceder el Administrador, pagando el causante mientras tanto la cuota de los meses anteriores. El mismo impuesto subsistió despues, y desde Octubre de 1870 se cobra á la Sra. Torres sobre el nuevo avaluo de \$6.138,75.

El C. Director de rentas asegura en su informe, que la Sra. Torres verificó sus pagos anteriores á Junio de 1851 sobre \$12.100; y no existiendo hasta ahora comprobante en contra, la cobranza del cinco al millar sobre esa misma cantidad, aparece

arreglada al decreto de 24 de Enero de 1861, pues como hemos visto este no determina manera especial de recaudacion, y el avaluo de 1851 se presenta como existente y legalmente practicado. Segun las prevenciones del decreto y reglamento de 14 de Junio de 1861, á las juntas y no al C. Director tocaba cuotizar á los causantes; no existe en esas disposiciones declaracion expresa de nulidad de las cuotizaciones erróneas ó maliciosas; las juntas fueron independientes del Administrador, que en ningun caso podría analizar sus resoluciones ni sustituirse en sus facultades, y por consiguiente, la alteracion que en su cobranza hace la autoridad ejecutora, de las cuotas fijadas por esas juntas, es en mi concepto ilegal. Habiendo sido la base de los impuestos subsecuentes hasta Julio de 1868, las cuotizaciones de las juntas ó las constancias de los padrones existentes, tampoco estaba en las facultades del Administrador variarlas por ningun pretexto, y menos puede hacerlo el C. Director de rentas despues de verificado el pago y habida por cubierta la obligacion del causante. El artículo 158 de la Constitucion del Estado previene, que las autoridades no tienen mas facultades que la que expresamente les conceden las leyes, sin que se entiendan permitidas otras por falta de expresa restriccion; y la facultad de variar la cuota fijada por las juntas, de decidir la nulidad de sus calificaciones, de separarse de la base precisa establecida para el cobro de los impuestos y de variar la base adoptada para el pago, no puede entenderse comprendida, ni en la facultad de promover lo conducente á la expedita recaudacion de impuestos, ni en la de cobrar los rezagos y liquidar los adeudos por contribuciones.

Si por rezago se entiende lo que ha quedado por pagar de un impuesto, el C. Director para liquidar el adeudo de la Sra. Torres debió limitarse á sustraer de la cuota fijada por la junta ó existente en el padron, la que se hubiese pagado; pero ni puede de-

cirse rezago el adeudo cuya existencia depende de la variacion de esas cuotas, ni es liquidar sustituir las bases del adeudo. Como se asienta en el escrito de queja, la cobranza, mediante esa alteracion de cuotas, equivale á que el C. Director se atribuya la facultad de revisar las operaciones de las juntas, á la declaracion de nulidad de las cuotizaciones, y á la condenacion de segundo pago.

Las contribuciones de 8 al millar de Agosto de 1868 á Octubre de 1870, se cobian conforme á la resolucion del Estado de México que no se separa de la base establecida por el artículo 4 del decreto de 25 de Abril de 1868; y habiendo podido la Señora Torres solicitar se avaluase de nuevo su casa, debió pagar por el antiguo avaluo segun el reglamento de 22 de Octubre de 1868; y por último, de Octubre de 1870 en adelante, es ilegítima la cobranza segun el nuevo avaluo. Por consiguiente, resulta que solo se han variado las cuotas de las contribuciones causadas desde Junio de 61 á Julio de 1868, y dejando á nueva liquidacion y como extras al amparo, las diferencias entre lo pagado por la Señora y lo que le abona la Direccion; en mi concepto, la variacion de esas cuotas importa una violacion de las garantías invocadas.

En efecto, se viola la del artículo 14 de la Constitucion, porque de hecho y sin facultades, la autoridad ejecutora declara ó tiene por nulas las cuotizaciones de las juntas, decide sobre la validez del pago, y como pena de defraudacion impone á la Señora Torres el pago de un exeso sobre la cuota que se le cobró. Se infringe tambien la que otorga el artículo 16, por que el Director de rentas no es la autoridad competente para decidir si la Señora Torres está obligada al pago que le exige, y por que impone una molestia á la Señora, haciendo uso de la facultad económico-coactiva, que para el caso no le está concedida; pues ya hemos visto que propiamente no se cobran rezagos en el procedimiento de la Direccion. Y la no

tificación y mandamiento de pago es una verdadera molestia y no una simple advertencia de cortesía, porque esa notificación es la manera de innovar el procedimiento económico-coactivo; y como se hace valer en el escrito de queja, si no se cumple, hace que tenga lugar la ejecución y que se incurra en los recargos.

Por lo que y con arreglo á los artículos 101 y 102 de la Constitución, debe concederse á la Señora Torres el amparo que solicita, por lo que toca á esas contribuciones en que ha habido variación de cuotas, dejando expeditas las facultades de la Dirección para el cobro de las demas; pero habiendo ofrecido la Señora presentar nuevos documentos y pudiendo estos tener alguna importancia en la resolución de V, el Promotor pide se mande abrir este negocio á prueba, por un término común que no exeda de ocho días, conforme al artículo 10 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Cuernavaca, 20 de Agosto de 1873.—*N. Medina*.—Una rúbrica.

Comparecencia del C. Promotor fiscal.

En 4 del mismo (Setiembre), compareció el C. Promotor y dijo: que no habiéndose rendido prueba alguna; por las razones expuestas en su pedimento de 20 de Agosto, pide al C. Juez se sirva declarar que la Justicia de la Unión ampara y protege á la Señora Doña Atanasia Torres en el goce de las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitución, contra los procedimientos de la Dirección de rentas, que variando las cuotas y base de los padrones, le cobra el exeso como rezagos de las contribuciones causadas de Junio de 1861 á Julio de 1868; dejando expeditas las facultades de la autoridad ejecutora, para que cobre los rezagos de contribuciones, tanto de las mencionadas segun las cuotizaciones que hicieron las juntas y conforme á los padrones, como de las demas, contra cuya cobran-

za no se concede protección ni amparo á la Señora quejosa, y firmó. Doy fe.—*N. Medina*.—Una rúbrica.—*Rego*.—Una rúbrica.

Son copias que certifico. Cuernavaca, 17 de Setiembre de 1873.—*José Anastasio Rego*, secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Cuernavaca, Setiembre 15 de 1873.—

Visto este juicio promovido por Doña Atanasia Torres de Fernandez solicitando amparo contra la dirección de Rentas del Estado, quien le cobra ochocientos cincuenta y nueve pesos ochenta y dos centavos (\$59\$ 82 cs.) por rezagos de contribuciones de dos fincas de la propiedad de la quejosa, y ciento setenta y dos pesos treinta y cuatro centavos (\$162 34 cs.) por recargos, con cuyas cuotizaciones y la conminación de hacer efectivo el cargo si dentro de tres dias no paga esas cantidades, por la total de mil veintidos pesos diez y siete centavos (\$1,022 16 cs.) y los nuevos recargos del 12½ p^o de ejecución y 25 p^o de remate, si dá lugar al embargo, dice, se le violan por la dirección, las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal: Vistos los fundamentos de la queja; lo informado por la dirección; los documentos justificantes de ambos y lo pedido por el ciudadano Promotor, con las leyes del Estado á que se refieren. Resultando: que la dirección alega para el cobro de los adeudos de la Señora Torres por su finca de la plaza principal, que esta finca en 1851 fué avaluada en doce mil cien pesos (\$12,100 00 cs.) y que la Señora solo ha pagado por las cuotizaciones que hicieron las juntas calificadoras, así en 1861 como en 1868, extralimitándose sobre seis mil pesos en que le regularon el valor de dicha finca, por lo que es claro que debe lo correspondiente á seis mil cien pesos (\$6,100 00 cs.) que indudablemente no se tomaron en cuenta; que su finca eso ha debido va-

ler, es decir, doce mil cien pesos (\$12,100 00 cs.) pues es notorio que no está en ruina, y con la erección del Estado todas las fincas en esta ciudad han subido de precio: que este punto es ya decidido, pues tanto el gobierno del Estado de México como el de este de Morelos, así lo han acordado con presencia de ese avalúo de 1851, con el que la misma señora se conformó cuando le fué manifestado; alegando la Señora Torres en contra de esto, que ese avalúo de 1851 por el que á su casa se le dió el valor de doce mil cien pesos (\$12,100 00 cs.) algun vicio debió tener, pues jamas se le cobró sobre esa base, sino solo sobre la de seis mil pesos (\$6,000 00 cs.); y el documento número ocho que presenta prueba en efecto, que solo se atendió á esta base y no á la de doce mil, y apesar de la reciente decision del gobierno del Estado de México en Agosto de 68, todavia en Setiembre se le admitió un abono sobre la base de seis mil: alega tambien, que tan exesivo es el avalúo de 1851, que ahora en 1870, en que ya el valor de las fincas habia subido por la erección del Estado, solo se le avalúa esa casa en seis mil ciento treinta y ocho pesos, es decir, en solos ciento treinta y ocho pesos mas de los seis mil, de que infiere que nunca pudo valer los doce mil cien; alega, que su casa incendiada y en ruinas, es la de la calle de Acapulco y no la de la plaza principal ó Portal de Eguía, cuyo avalúo se disputa: y alega, por último, que la Direccion no puede alterar la base de seis mil pesos, por la que la cuotizaron las Juntas calificadoras, porque las leyes que las crearon quisieron se estuviese á lo por ellas acordado, pasados los términos en que debieron ser objetados sus procedimientos, y por eso el artículo 7º reglamentario de la ley de 14 de Junio de 61 y el 15 de la de 25 de Abril de 68, no dejaban recurso alguno una vez practicado lo dispuesto en ellas mismas.

Considerando: que no es rezago lo que se dejó de pagar por diferencia de precio des-

preciada por las Juntas calificadoras y no reclamada oportunamente ante las revisoras ó despreciada tambien por estas, las que se componian del Juez de Letras, el Administrador principal y un comerciante ó propietario honrado del Distrito, con penas muy severas unas y otras Juntas por regulaciones arbitrarias ó de favoritismo que hiciesen en daño del Erario: que esto hace presumir la justificacion de sus procedimientos, así como su carácter personal; y que al facultar el artículo primero del decreto del Estado de 2 de Diciembre de 1871 á la direccion de rentas para liquidar y cobrar los rezagos que hubiese por contribuciones desde 1861, no puede autorizarla para revisar operaciones ya fenecidas y alterar las bases sobre que se hubiese cobrado, sino solo para cobrar lo que se deba sobre las mismas bases ó cuotizaciones de aquellas Juntas, ya glozadas y aprobadas por la Contaduría General del Estado; pues si tales revisiones pudieran autorizarse, ningun contribuyente tendría estabilidad en sus haberes, operaciones y giros, y esto importaría dar al decreto del Estado efecto retroactivo, que no puede tener, para revisar y reformar las operaciones de las Juntas contra los citados artículos reglamentarios y contra el artículo 14 de la Constitucion de la República. Por lo que, con esa revision de operaciones encomendadas á otras Corporaciones y Oficinas, operaciones ya fenecidas y archivadas, con la alteracion de sus bases, cobro de diferencias despreciadas; debiendo presumirse haber habido mérito para tal desprecio, pues no es creible un favoritismo tan escandaloso, ni su tolerancia por tantas personas como intervenian en él, se violan ciertamente las garantías de los artículos constitucionales invocados por la quejosa. Con fundamento pues de los artículos 101 fraccion primera y 102 del Código fundamental de la República, se declara:

Primero: la Justicia de la Union ampara y protege á D^a Atanasia Torres de Fernandez contra la direccion de Rentas del Esta-

do, no por el cobro de verdaderos rezagos ó adeudos que esta tenga, segun la base por la que las Juntas le cuotizaron su casa del Portal de Eguía, sino por la alteración de esa base y los cobros que en virtud de ella se le hacen, pues con esto se violan en su persona las garantías de los artículos 14 y 16 constitucionales citados.

Segunda: Notifíquese el fallo á la interesada, y hágase saber al C. Promotor, previniendo á la primera, reponga ocho hojas del sello tercero por igual número del sello quinto invertido en este juicio, pagando así mismo en papel el último suplido por este Juzgado.

Tercero: Publíquese este fallo en la forma acostumbrada, y elévase las actuaciones á la Corte Suprema de Justicia para su revision. Así definitivamente juzgando lo proveyó y firmó el C. Mariano Sansalvador Juez interino de Distrito del Estado de Morelos. Doy fé.—*Mariano Sansalvador*.—*José Anastasio Rego*, secretario.

Es copia que certifico. Cuernavaca, Setiembre 17 de 1873.—*J. Anastasio Rego*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 2 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 11 de Agosto del corriente año, promovió en Cuernavaca ante el Juez de Distrito del Estado de Morelos, Doña Atanasia Torres de Fernandez, contra el cobro que le hace el Administrador general de rentas del mismo Estado, de una cantidad de pesos por rezago de contribuciones desde 1861 á 1871, con cuya providencia, alterándose en concepto de la promovente la cuota asignada legalmente por las respectivas juntas calificadoras, se violan las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitucion federal. Vistas las constancias de autos y atenta la sen-

tencia del Juez de Distrito, en la que poniéndose en consideracion que conforme á derecho no está en las facultades del Administrador de rentas alterar la forma de cobrar los impuestos establecidos por las leyes, como segun los documentos que obran en este juicio y las esplicaciones de aquel funcionario, ha sucedido en el caso, notificando este á la Sra. interesada el pago de otra cantidad distinta de la que la correspondía segun la asignacion á la que con arreglo á las leyes la propia Sra. ha debido atenerse. Por el fundamento expuesto, en virtud del cual el cobro reclamado importa la violacion de las garantías que la Sra. Torres de Fernandez ha invocado, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: se confirma la sentencia del Juez de Distrito del Estado de Morelos pronunciada en Cuernavaca á 15 de Setiembre último, declarándose: que la Justicia de la Union ampara y protege á dicha Sra. Torres de Fernandez, contra el cobro que ha dado motivo al presente recurso de amparo.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañandole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias*.—*Pedro Ogazon*.—*Juan J. de la Garza*.—*José María Lozano*.—*José Arteaga*.—*Pedro Ordáz*.—*Manuel de Castañeda y Nájera*.—*Simon Guzman*.—*Luis Velasquez*.—*M. Zavala*.—*José García Ramírez*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 13 de Octubre de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.